

En la comunidad de San Pedro de Atacama esperan participar activamente en todas las definiciones de la estrategia, incluso conocer detalles de las negociaciones entre Codelco y SQM

Sergio Sáez F

“Queremos ser actores principales en esta mesa de diálogo. Queremos que se nos escuche y se nos de espacio de participación para velar por nuestros valores patrimoniales”.

Así resume el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, las aspiraciones de su comunidad frente a las decisiones que tomará el Gobierno con la Política Nacional del Litio que fue anunciada en abril por el Presidente Boric.

Según el jefe comunal, en el área de influencia del Salar de Atacama existe preocupación por los impactos ambientales y culturales que pueda traer una explotación masiva de este mineral. Reconoce que han existido acercamientos de parte del Gobierno, comenzando por el Presidente Boric y la ministra de Minería Aurora Williams, pero aclara que aún no existen acuerdos a firme.

“Estamos en una etapa inicial en las conversaciones. Creemos que es necesario construir confianza y asumimos que este no será un proceso de rápida ejecución”, comenta el alcalde que es clave en el mapa comunitario del litio.

Y es que el Gobierno ha trabajado con pinzas los diálogos con las comunidades por la Política Nacional del Litio, ya que saben que un paso en falso podría judicializar cualquier tratativa, incluso un eventual acuerdo entre Codelco y SQM en el solar.

El peor de los escenarios para el Ejecutivo es que una comunidad atacameña acuda a la justicia reclamando por la falta de un proceso de consulta con pueblos indígenas (PCPI). Este es un mecanismo de participación basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas que surge cada vez que se adoptan medidas



Dialogo con las comunidades

Alcalde de Atacama y litio: “Estamos en etapa inicial de conversaciones” con gobierno

legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Una pasada por tribunales está dentro de los riesgos y ya hay antecedentes. Ocurrió con la licitación del litio de Sebastián Piñera, derribada por la comunidad Coyo en la Tercera Sala de la Corte Suprema. Gabriel Muñoz, abogado de la agrupación que derribó el proceso en el Gobierno anterior sostiene que debería existir un mecanismo de participación indígena durante todo el proceso, incluso en las negociaciones entre las empresas que estén interesadas en participar en los CEOL (contratos especiales de operación de litio).

“De acuerdo a mi experiencia no hay que cometer los mismos errores que se cometieron en el Gobierno de Piñera en cuanto se adjudicó la licitación sin consulta indígena. Esta es indispensable previo a cualquier cosa inclusive antes de sentarse a negociar. Es importante que la comunidad esté presente en las negociaciones para que sean parte de la estrategia”, relata el profesional.

Temores en la zona

La semana pasada, en el Centro de Eventos Coyo Antay de San Pedro de Atacama se desarrollaron de manera separada dos mesas de diálogo. El jueves con los pueblos indígenas y el viernes con la sociedad civil.

Según fuentes conocedoras del proceso, para algunos de los asistentes existen dudas sobre la entrada de nuevos actores en la explotación del Salar de Atacama y por eso quieren conocer detalles sobre las negociaciones entre Codelco y SQM.

“Hasta la fecha, solo han operado SQM y Albemarle en el Salar de Atacama, ellos conocen la zona, pero existe una duda sobre qué pasará si entra Codelco u otra empresa, que no lo conoce entre y luego haya impactos ambientales”, comenta una fuente.

Hasta el 15 de diciembre, los representantes de las mesas en la comuna tienen espacio para manifestar sus dudas so-



“Queremos ser actores principales en esta mesa de diálogo”
Justo Zuleta, alcalde de San Pedro de Atacama.

bre lo planteado por el Gobierno en el proceso de diálogo. Para esto el ministro entregó un correo electrónico.

Según fuentes del Consejo de Pueblos Atacameños, “no hay una sola visión. Existen dirigentes que consideran buena la estrategia y otros que tienen miedo a una sobre explotación del recurso”. Las mismas fuentes apuntan a que “más que un diálogo, el proceso ha sido un monólogo”.

El alcalde de San Pedro de Atacama reafirma que “no se puede establecer una política en ausencia de los pueblos locales. Nosotros nos hemos analizado cómo participaremos. Nuestra primera solicitud es que nos incluyan en todas las conversaciones (...) sabemos la importancia mundial del litio, pero no queremos que se endose a nuestra comunidad el rol de ser los salvadores de la sustentabilidad en el mundo”, apunta Zuleta.

Mirada experta

El doctor en Filosofía por la Universidad de Cambridge y profesor visitante del Royal College of Art del Reino Unido, Alonso Barros, apunta a que la estrategia nacional del litio debe ser sometida a un proceso de consulta indígena.

“En el caso atacameño, creo que Corfo debe consultar sus actos administrativos respecto del tema litio, así lo falló la Corte Suprema sobre un caso relacionado a la distribución de recursos de SQM”, comenta.

El académico se refiere a un recurso presentado por la Comunidad de Camar, que manifestó que no hubo

proceso de consulta en la renegociación del contrato entre Corfo y SQM en 2018. En este episodio, la Corte dio la razón a los reclamantes. Además el experto sostiene que en el caso de Maricunga, Codelco igual debería realizar este mecanismo con el fin de evitar riesgos de judicialización en las pertenencias ubicadas a 160 kilómetros de Copiapó.